

Cuestionando el informe del UNHRC “De la ocupación al genocidio”: una refutación

Equipo de We Believe in Israel (WBI), en asociación con Stop the Hate UK y The Shield of David
<https://forumforforeignrelations.org/>

[Resumen ejecutivo.](#) 2

[Introducción y contexto.](#) 2

[El libelo del genocidio: un grave insulto a la ley, la lógica y la memoria.](#) 4

[El libelo del capitalismo genocida: una refutación a las fantasías económicas de Francesca Albanese.](#) 7

[La acusación de apartheid y la realidad pluralista de Israel.](#) 9

[Hacia el equilibrio y la rendición de cuentas.](#) 12

Resumen ejecutivo

El informe de Francesca Albanese de julio de 2025 al Consejo de Derechos Humanos de la ONU — con el grandilocuente título «De la economía de la ocupación a la economía del genocidio»— no es tanto un análisis jurídico como una polémica, revestida de solemnidad burocrática. Con 21 000 palabras, no es breve. Pero es impresionante, no por su perspicacia ni su claridad jurídica, sino por su omisión, distorsión y afán ideológico.¹

En el centro del informe se encuentra una proposición simple: que Israel, única entre las naciones, es culpable de un crimen tan grave que merece todo el peso de la censura internacional: genocidio. Es una palabra que Albanese menciona nada menos que 57 veces. Las palabras "Hamás", "terrorismo" o "rehén" no aparecen ni una sola vez. Esto no es casualidad. Es la base de una ilusión moral cuidadosamente construida.

Este documento de políticas desmonta esa ilusión. Expone las principales deficiencias del informe — legales, metodológicas y morales — y ofrece a los responsables políticos y parlamentarios una solución basada en la evidencia. Lo que surge no es simplemente una crítica a la deficiente investigación académica, sino una advertencia: la maquinaria del derecho internacional se está manipulando para favorecer la guerra ideológica.

Introducción y contexto

La Sra. Albanese, Relatora Especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, no es ajena a la controversia. Desde instar a la "lucha armada" hasta equiparar el sionismo con el apartheid, su historial es de polémica disfrazada de análisis. En esta última publicación, recurre al término nuclear —genocidio— y lo aplica con desenfreno. Es, en efecto, una difamación disfrazada de lenguaje jurídico.

Comencemos con el término en sí. El genocidio, según la Convención sobre el Genocidio de 1948², exige una intención específica: el propósito demostrable de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Se trata de un estándar muy alto. Y con razón. Albanese no lo supera. Ni siquiera lo intenta. Su "prueba" de intención genocida consiste en citas selectivas, a menudo fuera de contexto, de políticos y medios de comunicación israelíes. Muchas de estas citas han sido condenadas públicamente dentro del propio Israel. Mientras tanto, no se abordan los documentos de política, los protocolos militares ni las amplias restricciones legales de Israel.

¹ Francesca Albanese, De la economía de la ocupación a la economía del genocidio, Informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU A/HRC/59/23 (versión anticipada sin editar), julio de 2025, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session59/advance-version/a-hrc-59-23-aev.pdf>.

² Asamblea General de las Naciones Unidas, Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, 9 de diciembre de 1948, Naciones Unidas Treaty Series, vol. 78, pág. 277, <https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/Genocide%20Convention.pdf>

Leer el relato de Albanese es entrar en un universo alternativo, uno en el que el terrorismo palestino simplemente no existe. No se menciona la masacre de Hamás del 7 de octubre, un suceso tan grotesco en su barbarie que fue comparado con el ISIS, incluso por los críticos más acérrimos de Israel. No se mencionan cohetes, terroristas suicidas, túneles excavados bajo jardines de infancia ni rehenes desfilando en Gaza. Nada.³

El efecto es grotesco: un relato de victimización completamente libre de causalidad. Esto no es un análisis legal. Es la estrategia narrativa del propagandista.

Albanese acusa a Israel de gestionar una "economía de genocidio", una acusación tan incendiaria que merece una breve pausa. El informe argumenta que la economía israelí se basa en la "apropiación de la mano de obra, la tierra y los recursos palestinos". Esta afirmación es abstracta. No se mencionan los Protocolos de París de 1994, firmados por la propia Autoridad Palestina, que rigen las relaciones económicas entre Israel y los territorios. No se mencionan las importaciones y exportaciones palestinas que pasan por puertos israelíes según los marcos acordados. Y, desde luego, no se mencionan los cientos de millones de dólares en ingresos fiscales mensuales que Israel transfiere a la AP, incluso en tiempos de conflicto armado.

La acusación de «colonialismo» es aún más absurda. Israel no es una potencia colonial extranjera; es el Estado-nación de un pueblo autóctono del territorio, la mayoría de los cuales son refugiados o descendientes de refugiados de los estados árabes vecinos. Lo que Albanese llama «colonialismo de asentamiento» es, en realidad, el regreso de un pueblo apátrida a su patria ancestral, un fenómeno sin precedentes en la historia moderna. Presentar esto como conquista no solo es deshonesto, sino también obsceno.

Quizás ningún término se abusa más en este informe que el de «apartheid». La acusación se repite con una frecuencia agotadora, pero nunca se fundamenta. Albanese omite mencionar que más del 20% de la población israelí es árabe, que vota, sirve en la Knéset, en el poder judicial y en las Fuerzas de Defensa de Israel. Ignora que el árabe es lengua oficial en Israel y que los partidos árabes —algunos de ellos explícitamente antisionistas— hacen campaña libremente en las elecciones israelíes⁴.

En Cisjordania, mientras tanto, existen distinciones legales debido a un conflicto, no a una ideología racial. La ley militar israelí se aplica en las zonas bajo control israelí; la ley de la Autoridad Palestina se aplica en el resto del territorio. Eso no es apartheid. Es la trágica consecuencia de una guerra sin resolver.

Hay algo especialmente peligroso en la obra de Albanese. No porque sea cierta, sino porque está diseñada para ser creída. No está escrita para juristas ni historiadores. Está escrito para ser

³ Patrick Kingsley e Isabel Kershner, "Escenas de horror después de la masacre de Hamás en Israel", The New York Times, 12 de octubre de 2023, <https://www.nytimes.com/2023/10/12/world/middleeast/hamas-attack-israel.html>; Véase también BBC News, "¿Qué sucedió en Israel y Gaza el 7 de octubre?", BBC, 13 de octubre de 2023, <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-67039975>.

⁴ Oficina Central de Estadísticas (Israel), Resumen estadístico de Israel 2023, <https://www.cbs.gov.il/en/publications/Pages/2023/Statistical-Abstract-of-Israel-2023-No-74.aspx>; véase también Yohanan Plesner, "Ciudadanos árabes en Israel: tendencias actuales y direcciones futuras", Instituto de Democracia de Israel, 15 de marzo de 2023, <https://en.idi.org.il/articles/48264>.

citado: en pancartas de protesta, discursos parlamentarios y diatribas en redes sociales. No es erudición. Es munición.

Y, sin embargo, lleva el sello de las Naciones Unidas. Este es el verdadero escándalo. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ya famoso por su obsesión con Israel (se han aprobado más resoluciones contra él que contra Siria, Irán y Corea del Norte juntos), se ha convertido ahora en una plataforma para vendettas ideológicas.

El informe de Francesca Albanese no es el triunfo del análisis jurídico. Es su destripamiento. Al despojarnos de contexto, anular la agencia palestina y utilizar el derecho internacional como arma, no nos acerca a la paz ni a la justicia. Garantiza que ambas permanezcan fuera de nuestro alcance.

La gran tragedia es que se necesita una conversación real sobre el sufrimiento palestino, la política israelí y el camino hacia la coexistencia. Pero este informe no contribuye a esa conversación.

La termina con un grito de acusación y el sonido de portazos.

Si Gran Bretaña –y el mundo civilizado– ha de tomar en serio el derecho internacional, también debe tomar en serio a quienes abusan de él.

El libelo del genocidio: un grave insulto a la ley, la lógica y la memoria

Si se busca extinguir la claridad moral de un conflicto, no hay camino más rápido que inyectarle el vocabulario de la aniquilación. «Genocidio» es una de las palabras más poderosas del léxico moderno, una que lleva consigo el hedor de Auschwitz, la matanza de Ruanda y las tumbas de Srebrenica. Invocarla a la ligera no solo es calumniar al acusado, sino diluir el significado del crimen mismo. Y, sin embargo, esto es precisamente lo que Francesca Albanese, Relatora Especial de la ONU, ha hecho en su último informe.

Titulado, con sombría floritura, " De la economía de la ocupación a la economía del genocidio", el panfleto de 20.000 palabras de Albanese utiliza la palabra "genocidio" más de cincuenta veces. En esa misma extensión de prosa, las palabras "Hamás", "terrorismo" y "7 de octubre" aparecen exactamente cero veces. No se menciona a los 1.200 israelíes asesinados en sus hogares, ni a los bebés quemados vivos, ni se reconocen los miles de cohetes disparados indiscriminadamente contra la población civil. La omisión no es accidental, sino ideológica.

El informe no es una investigación; es una acusación escrita antes de que se presenten las pruebas, un intento de etiquetar a Israel no sólo como un país defectuoso, sino como un país fundamentalmente malvado.

Seamos claros: acusar a un estado democrático, por muy atribulado o imperfecto que sea, de genocidio no es una censura menor. Es equiparar moralmente a Israel con Hitler, Stalin y Pol Pot. Es decir que el Estado judío no solo se equivoca, sino que es criminal en su propia existencia. Esto no es un llamado a la reforma, sino a la erradicación. Albanese, abogada de profesión, sin duda lo sabe. Lo cual hace que su elección de palabras sea aún más inexcusable.

Pero su acusación se desmorona al entrar en contacto con la realidad jurídica y empírica.

Según la Convención sobre el Genocidio de 1948 (un documento redactado, con amarga ironía, a raíz del Holocausto), el genocidio se define como actos cometidos con la “intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal”.

Estos actos incluyen no sólo matar, sino también infligir condiciones de vida que hayan de acarrear destrucción, impedir nacimientos o trasladar por la fuerza a niños⁵.

Examinemos los hechos. ¿Ha usado Israel la fuerza? Sí. ¿Ha lanzado operaciones militares en Gaza y Cisjordania? Por supuesto. Pero el uso de la fuerza, incluso desproporcionada, no constituye genocidio.

Debe existir una intención demostrable de exterminar a un pueblo, no simplemente de derrotar a un adversario armado. Y aquí la afirmación se desmorona. No existe ninguna política ni declaración israelí, oficial o de otro tipo, que busque la destrucción del pueblo palestino como grupo.

Todo lo contrario: a pesar del persistente conflicto, la población palestina, tanto en Gaza como en Cisjordania, ha crecido de forma constante durante décadas. Según datos de la ONU, la población de Gaza aumentó de 1,3 millones en 2000 a más de 2,3 millones en 2023. Sería difícil encontrar un genocidio que provoque un crecimiento demográfico⁶.

Contraste esto con la retórica abiertamente exterminadora de Hamás. Su carta fundacional promete que «Israel existirá y seguirá existiendo hasta que el islam lo extermine». Sus líderes han llamado al asesinato de judíos —no israelíes, sino judíos— en todo el mundo. Y el 7 de octubre de 2023, demostraron precisamente lo que esto significa: familias enteras masacradas, rehenes tomados y civiles atacados con alegre crueldad.

Nada de esto aparece en el informe de Albanese. No se mencionan los túneles terroristas excavados bajo las escuelas. No se menciona la ayuda desviada por Hamás para construir cohetes. No se mencionan los hospitales convertidos en cuarteles militares ni los más de 130 rehenes israelíes que aún se consumen en Gaza. En cambio, se nos presenta una ficción grotesca en la que un bando mata, oprime y explota, mientras que el otro simplemente sufre.

Incluso en tiempos de guerra, Israel ha permitido la entrada de convoyes de ayuda —alimentos, medicamentos y combustible— a Gaza. Ha establecido hospitales de campaña para los palestinos. Ha lanzado folletos, enviado SMS de advertencia e incluso realizado llamadas telefónicas a civiles para evitar bajas innecesarias. Ningún otro Estado del mundo, bajo el fuego de cohetes, se comporta con tanta moderación. Ciertamente, ningún Estado genocida lo haría⁷.

Y, sin embargo, Albanese acusa a Israel de diseñar una economía genocida, de empobrecer

⁵ Asamblea General de las Naciones Unidas, Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, 9 de diciembre de 1948, Naciones Unidas Treaty Series, vol. 78, pág. 277, https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocities-crimes/Doc.1_Convention%20on%20the%20Prevention%20and%20Punishment%20of%20the%20Crime%20of%20Genocide.pdf.

⁶ ⁶ Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, División de Población, Perspectivas de población mundial 2022, consultado el 4 de julio de 2025, <https://population.un.org/wpp/>.

⁷ Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, “Esfuerzos humanitarios de las FDI en Gaza”, consultado el 4 de julio de 2025, <https://www.gov.il/en/departments/news/idf-humanitarian-efforts-gaza>.

deliberadamente a los palestinos para destruirlos. Esta es una acusación tan absurda que sería ridículo si no fuera tan tóxico.

Sería ridículo si no fuera tan tóxico. Durante años, Israel facilitó el empleo a decenas de miles de gazatíes dentro de sus fronteras, permitió que la ayuda financiera qatarí llegara a Gaza y transfirió electricidad y agua, a menudo sin pago. Estas no son las acciones de un Estado que busca el exterminio. Son las decisiones —por difíciles y cuestionables que sean— de una democracia que intenta desenvolverse en un campo de batalla donde el enemigo se esconde tras sus propios civiles.

Y si esto es genocidio, entonces hay que preguntarse: ¿qué fue, por favor, Ruanda?

En 1994, 800.000 tutsis fueron masacrados en un lapso de 100 días. En Srebrenica, 8.000 hombres y niños musulmanes fueron alineados y ejecutados por el crimen de haber nacido. Equiparar las acciones de Israel con estas atrocidades no solo es jurídicamente erróneo, sino también moralmente obscuro. Trivializa el verdadero genocidio y convierte el derecho internacional en un teatro político⁸.

Hay, por supuesto, una razón para este juego de manos retórico. El término «genocidio» no se usa aquí para ilustrar, sino para silenciar. Impide la defensa. Vuelve vergonzoso el diálogo. Transforma a Israel de nación en paria, de estado en crimen. Y ese, en última instancia, es el objetivo.

El informe de Albanese no es un alegato a favor de la dignidad palestina. Es un garrote ideológico diseñado para deslegitimar la idea misma de la autodeterminación judía. Utiliza el derecho internacional como arma contra su propósito original e insulta la memoria de aquellos para quienes el término «genocidio» no era una exageración, sino una realidad vivida.

En un momento en que el antisemitismo resurge en Occidente, en que las escuelas judías requieren guardias armados y en las calles británicas resuenan cánticos de "¡Muerte a las Fuerzas de Defensa de Israel!", no solo es imprudente, sino peligroso, difundir esta difamación bajo el sello de las Naciones Unidas. Hacerlo es envalentonar a quienes no buscan la paz, sino la supresión.

Seamos claros: criticar la política israelí no es antisemita. Pero tildar a Israel de Estado genocida no es crítica. Es una calumnia. Es una mentira descarada, dañina y profundamente inmoral.

Y esto no debe continuar así.

El libelo del capitalismo genocida: una refutación a “las fantasías económicas” de Francesca Albanese

En el centro del informe de la ONU de julio de 2025 de Francesca Albanese, *Desde la economía de la ocupación a la economía del genocidio*, se esconde una difamación económica, una nueva iteración de una vieja calumnia, vestida no con camisas pardas sino con el doble discurso burocrático y la papelería de la ONU.

Esto no es erudición jurídica. Ni siquiera es activismo competente. Es la instrumentalización de la terminología económica al servicio de la guerra ideológica.

⁸ Naciones Unidas, “Programa de divulgación sobre el genocidio de 1994 contra los tutsis en Ruanda y las Naciones Unidas”, consultado el 4 de julio de 2025, <https://www.un.org/en/preventgenocide/rwanda>. Tribunal Penal Internacional de las Naciones Unidas para la ex Yugoslavia, “Masacre de Srebrenica”, consultado el 4 de julio de 2025, <https://www.icty.org/en/outreach/featured-cases/srebrenica>.

Albanese presenta a Israel no solo como una potencia ocupante, sino como un depredador económico vampírico que se atiborra de la miseria palestina. Empresas, instituciones, cooperativas: nada escapa a su mirada acusadora. Todos son condenados como instrumentos de "explotación colonial" y "especulación genocida", como si cada línea de código, sistema de riego por goteo o tren de cercanías israelí fuera solo un engranaje de algún monstruoso aparato de destrucción.

Desmantelemos esta narrativa grotesca.

Para empezar, la economía de Israel no se basa, ni nunca se ha basado, en los recursos palestinos.

A diferencia de las antiguas potencias coloniales, Israel no extrae oro de Cisjordania, no extrae petróleo de Gaza (no existe) ni recluta mano de obra palestina para la producción imperial. El PIB de Israel se basa en la innovación: sus laboratorios de biotecnología, empresas de software, farmacéuticas, startups de inteligencia artificial y grandes potencias de la ciberseguridad. Tel Aviv no debe su paisaje urbano al saqueo de la riqueza palestina. Se lo debe a los Premios Nobel, el código y las ideas⁹.

El entrelazamiento económico entre Israel y los territorios palestinos, tal como es, no fue ideado en una siniestra trastienda sionista. Es el resultado de la historia, la geografía y la necesidad. Agua, electricidad, asistencia médica: Israel las proporciona, a menudo gratuitamente y a menudo bajo fuego enemigo. ¿La electricidad que alimenta los hospitales de Gaza? Israelí.

¿El agua que llega a hogares y escuelas? Israelí. ¿Los envíos de ayuda, incluso mientras los cohetes cruzan la frontera? Facilitados por Israel, a menudo saboteados por Hamás.

Fundamentalmente, estos intercambios no se impusieron por la fuerza. Se negociaron. Los Acuerdos de Oslo —borrados del relato de Albanese— se firmaron de buena fe y codificaron mecanismos de cooperación económica, intercambio de recursos y administración civil. Que el experto designado por la ONU borrara tal historial diplomático revela no solo deshonestidad intelectual, sino un intento deliberado de falsificar el historial.

Señala la disparidad económica entre Israel y los territorios como prueba de explotación. Pero atribuir esto exclusivamente a la política israelí es perezoso y deshonesto. Tomemos, por ejemplo, los infames invernaderos. En 2005, tras la retirada de Israel de Gaza, más de 3.000 invernaderos agrícolas de alta tecnología quedaron abandonados —muchos donados por filántropos internacionales— para sentar las bases de una próspera industria agrícola palestina. Fueron saqueados, destrozados y arrasados por milicias locales en cuestión de días. Un microcosmos, si se necesitara uno, de oportunidades desperdiciadas no por el sionismo, sino por el nihilismo.

¿Qué hay de las décadas de corrupción dentro de la Autoridad Palestina? La comunidad internacional, incluidas las mismas agencias de la ONU que Albanese cita tan selectivamente, ha documentado desde hace tiempo un estancamiento económico impulsado no por la política israelí, sino por monopolios, nepotismo y mala gestión faccional. Un informe de 2023 del Comité de

⁹ OCDE, Estudios económicos de la OCDE: Israel 2020, marzo de 2020, <https://www.oecd.org/economy/surveys/Israel-2020-OECD-economic-survey-overview.pdf>; Start-Up Nation Central, "El ecosistema tecnológico israelí", consultado el 4 de julio de 2025, <https://startupnationcentral.org>.

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU señaló explícitamente los fallos de gobernanza de la AP como "contribuyentes significativos al estancamiento económico". Pero esto también está ausente en el texto de Albanese, porque su argumento no se basa en datos, sino en dogmas.

Su desdén se extiende a las empresas israelíes, internacionales y colaborativas. Incluso el Tren Ligero de Jerusalén se ve arrastrado al banquillo de los acusados. Este sistema de tranvías, que conecta Jerusalén Este con Jerusalén Oeste, sirviendo tanto a las comunidades árabes como a las judías, se presenta como una herramienta del apartheid. Que lleve a miles de habitantes de Jerusalén Este a empleos, hospitales y escuelas es, aparentemente, irrelevante. La integración, al parecer, es ahora una forma de agresión colonial.

Albanese condena a pioneros de la agrotecnología como Netafim y a distribuidores de alimentos como Tnuva, acusándolos de "capitalismo genocida". Estas son empresas cuyas tecnologías han hecho que los desiertos florezcan y el agua circule más. Su delito no es la explotación, sino el origen. El mensaje es claro: haga lo que haga Israel, debe ser presentado como malévolo.

¿Y qué hay de la cooperación económica? ¿Qué hay de los empresarios israelíes y palestinos que han desarrollado conjuntamente granjas acuapónicas o modelos de riego compartido? ¿Qué hay de los miles de palestinos empleados en el sector privado israelí, cuyos salarios sustentan a familias y comunidades?

Albanese no tiene cabida para estas historias. Son incómodas. Sugieren que la coexistencia es posible, y la posibilidad es fatal para la industria de las quejas.

De hecho, el verdadero objetivo de Albanese se hace inconfundible: censurar a cualquier empresa asociada con Israel y así justificar una campaña de boicot, desinversión y sanciones, amparada en la respetabilidad del derecho internacional. Pero sus cimientos están resquebrajados. Incluso Noruega, un gobierno que no se caracteriza por su alineamiento servil con Israel, ha contraatacado. El Ministerio de Finanzas noruego advirtió recientemente contra la inclusión arbitraria de empresas en listas negras basándose en premisas legales erróneas, advirtiendo que esto podría exponer a las empresas europeas a demandas y represalias económicas.

Esto no es activismo. Es sabotaje económico disfrazado de solidaridad.

Seamos precisos: si su premisa fundamental es que Israel es genocida, entonces cualquier comercio, cualquier empresa, cualquier apretón de manos se vuelve moralmente obscuro. Esto no es razonamiento legal. Es excomuniación ideológica. Se basa en viejos y peligrosos instintos.

¿Cuándo, en la historia judía, se nos permitió comerciar, trabajar y obtener ganancias sin sospechas?

Y esta es la parte verdaderamente peligrosa. Francesca Albanese no se limita a distorsionar los hechos. Ella instrumentaliza el lenguaje con la precisión de una propagandista. Calificar la interdependencia económica de especulación genocida es, en efecto, decir: no comercien con los judíos, pues tocarlos es la muerte.

Tales difamaciones deben responderse con claridad moral. Cuando las instituciones internacionales se convierten en cámaras de resonancia de la paranoia antiisraelí, se desacreditan no solo a sí mismas, sino también a todo el concepto de defensa de los derechos humanos. Convierten la ley en

teatro, y el teatro en teatro del absurdo.

Los lazos económicos —imperfectos, desiguales, pero reales— siguen siendo uno de los últimos hilos que unen a israelíes y palestinos. Cortarlos es amputar la extremidad misma de la que aún podría surgir la paz.

Este informe no es un documento legal. Es un panfleto. Una polémica. Un alegato a favor de Hamás, disfrazado de derechos humanos. No promueve la justicia. La estrangula.

Si la ONU desea conservar un mínimo de seriedad moral, debe repudiar esta difamación y centrar su atención en la ardua y necesaria labor de construir puentes económicos. Debe escuchar no a quienes prosperan con el agravio, sino a quienes se atreven a construir, incluso en medio de la ruina.

La acusación de apartheid y la realidad pluralista de Israel

Si quieres envenenar una causa, inyéctale el vocabulario equivocado. Y en ningún ámbito del discurso moderno esto es más evidente que en el incesante intento de etiquetar a Israel como un estado de apartheid. La acusación no solo es históricamente inculta, sino que es una calumnia tan corrosiva que contamina todo debate razonable sobre la paz, los derechos y la diplomacia.

Y, sin embargo, reaparece —con una previsibilidad abrumadora— en todos los artículos patrocinados por las Naciones Unidas. La última contribución de Francesca Albanese al género (De la economía de la ocupación a la economía del genocidio) es una clase magistral de seducción ideológica: emocionalmente potente, legalmente imprecisa e intelectualmente fraudulenta.

La comparación con la Sudáfrica del apartheid no es simplemente inexacta, sino obscena.

Para empezar, recordemos que «apartheid» no es sinónimo de «segregación» ni de «desigualdad». Según el derecho internacional (en concreto, la Convención sobre el Apartheid de 1973 y el Estatuto de Roma de 1998), se refiere a la opresión racial sistemática e institucionalizada de un grupo sobre otro. El sistema debe aplicarse por ley, con la intención de dominar y reprimir.

Nada de esto está presente en Israel.

Los árabes representan aproximadamente el 21% de la ciudadanía israelí. Votan. Actúan como jueces, incluso en el Tribunal Supremo. Ocupan escaños parlamentarios. El árabe era, hasta hace poco, lengua oficial. Los árabes israelíes sirven en el ejército (de forma voluntaria), dirigen hospitales, dirigen universidades y presiden tribunales. El actual director de urgencias médicas del Hospital Ichilov de Tel Aviv, uno de los más grandes del país, es un árabe israelí¹⁰.

¿Qué estado de apartheid en la historia le dio a la supuesta “clase oprimida” el poder de decidir sobre el opresor?

He aquí una verdad menos cómoda pero más precisa: si existe un sistema de apartheid en los

¹⁰ Oficina Central de Estadísticas de Israel, “Población de Israel en vísperas de 2024”, 1 de enero de 2024 <https://www.cbs.gov.il>; Iniciativas Abraham, Índice de igualdad de los ciudadanos árabes de Israel 2023, <https://abrahaminitiatives.org/en/equalityindex>; Hospital Ichilov (Centro Médico Sourasky de Tel Aviv), “Conozca a nuestro equipo”, consultado el 4 de julio de 2025, <https://www.tasmc.org.il>.

territorios palestinos, no es el impuesto por Israel, sino por la Autoridad Palestina y Hamás.

En Gaza, la homosexualidad es ilegal. Los cristianos sufren acoso. Las mujeres usan velo por decreto, no por elección propia. Tanto en Gaza como en Cisjordania, la venta de tierras a un judío se castiga con la muerte; sí, la muerte. En las zonas administradas por la Autoridad Palestina, los judíos no pueden vivir. Ni uno solo.

Comparemos esto con Israel, donde los barrios árabes prosperan y los ciudadanos árabes prosperan. Preguntémosnos, pues, sin rodeos: ¿qué bando practica la exclusión étnica? ¿Qué sociedad se niega a tolerar al Otro?

Albanese y sus allegados ideológicos afirman con frecuencia que Israel aplica un sistema de "dos leyes para dos pueblos" en Cisjordania. Pero esto también es una distorsión deliberada. En Cisjordania, los colonos israelíes, como ciudadanos de Israel, se rigen por la ley civil israelí.

Los palestinos, que no son ciudadanos de Israel sino residentes de territorios en disputa bajo el gobierno de la Autoridad Palestina, se rigen por un régimen jurídico diferente.

Esto no es apartheid. Es el resultado legal de un conflicto no resuelto.

Y la bifurcación de regímenes jurídicos no es exclusiva de Israel. Tomemos, por ejemplo, el norte de Chipre, ocupado por Turquía desde 1974. Los colonos turcos allí viven bajo la legislación turca; los grecochipriotas desplazados del norte se rigen por estatutos diferentes. La comunidad internacional, si bien exige un acuerdo, nunca ha acusado a Turquía de practicar el apartheid.

¿Por qué se juzga a Israel con un estándar diferente?

Otra piedra angular de la difamación del apartheid es la afirmación de que Israel es un «Estado judío» y, por lo tanto, necesariamente discriminatorio. Pero aquí se esconde una burda maniobra intelectual.

Israel se define como el Estado-nación del pueblo judío, al igual que Francia se define como la patria de los franceses, Grecia de los griegos, etc. Esto no afecta a los derechos de los ciudadanos no judíos. La Ley Fundamental: Israel como Estado-nación del pueblo judío —a menudo citada como "prueba" del apartheid— preserva explícitamente los derechos individuales y se refiere únicamente a la autodeterminación nacional. Es decir, afirma a Israel como un hogar nacional judío, no como una etnocracia judía.

Además, la identidad nacional judía no es racial. El pueblo judío incluye a etíopes, yemeníes, rusos y conversos de todo el mundo. Si el sionismo fuera un proyecto de apartheid, sería espectacularmente incompetente.

Gran parte de la difamación sobre el apartheid se basa en otra premisa tácita: que los judíos deberían ser una minoría en su propio estado y que cualquier esfuerzo por mantener una mayoría judía es inherentemente racista. Pero analicemos esto.

La preservación del carácter nacional es un objetivo reconocido en el derecho internacional y la filosofía política. Muchos países, como Japón, Arabia Saudita y Suiza, imponen cuotas de inmigración para preservar la cohesión cultural. Solo cuando los judíos lo hacen se denomina apartheid.

Se podría concluir que lo que ofende a los críticos no son las políticas de Israel, sino la existencia de Israel.

¿Por qué entonces figuras como Francesca Albanese insisten en insistir en este caballo retórico muerto?

Porque funciona.

«Apartheid» es una palabra electrizante. Evoca imágenes de sudafricanos negros arrancados de sus hogares y fusilados en la calle. Transforma un complejo conflicto nacional en una simple dicotomía moral. Y deslegitima por completo al Estado judío. Después de todo, si Israel es un apartheid, hay que desmantelarlo, no reformarlo.

Y ahí está el objetivo: no acabar con la ocupación, sino borrar a Israel.

La difamación del apartheid va más allá de difamar una democracia. Perjudica a los palestinos al perpetuar la falsa esperanza de que la reputación internacional de Israel puede destruirse solo con retórica. Envenena el discurso público al sustituir el diálogo por la denuncia. Y degrada el legado de la lucha de Sudáfrica: un mal histórico singular ahora diluido en una herramienta de propaganda.

Decir que Israel no es perfecto es quedarse corto. Pero decir que es un Estado de apartheid es una abominación. Es el equivalente intelectual de un incendio provocado: un intento calculado de quemar la posibilidad de paz para desfilas sobre las cenizas.

Que hablen claro quienes se preocupan por la justicia. Israel no es Sudáfrica. Y Francesca Albanese no es Desmond Tutu.

Hacia el equilibrio y la rendición de cuentas

Llega un punto en el que la retórica deja de iluminar y, en cambio, empieza a oscurecer: a ofuscar, distorsionar y, finalmente, a incitar. Ese punto quedó atrás hace tiempo en el informe de Francesca Albanese de julio de 2025 al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, grandilocuentemente titulado «De la economía de la ocupación a la economía del genocidio». El título por sí solo ofrece un anticipo de la deshonestidad intelectual que encierra. No se trata de un documento de escrutinio jurídico mesurado, sino de una acusación incendiaria: un manifiesto disfrazado de mandato.

Llamémoslo por su nombre: una polémica fiscal cuyo verdadero propósito no es la paz, sino el pariatismo. En la interpretación de Albanese, Israel no es un Estado que enfrenta amenazas existenciales ni se defiende de agresores sanguinarios; es una "máquina genocida" diseñada para oprimir, explotar y exterminar. Genocidio, apartheid, extracción colonial: se sacan a la luz todas las calumnias posibles, se lanzan con desenfreno y, curiosamente, se dejan sin explicación en términos legales o históricos significativos. Las acusaciones no son simplemente erróneas; están diseñadas para reemplazar los hechos con furia, la ley con eslogan y la diplomacia con deslegitimación.

La metodología del informe —si es que así se le puede llamar— no se basa en un análisis jurídico

riguroso, sino en una supresión deliberada del contexto. En ningún momento menciona el pogromo del 7 de octubre, la masacre más brutal de judíos desde el Holocausto, ni los objetivos genocidas declarados de los perpetradores, ni la vasta arquitectura del terror de Hamás, ni las décadas de rechazo por parte de los líderes palestinos. Nada de esto aparece. En cambio, Israel es simplemente un villano, desde el principio: un crimen en sí mismo.

Y ese es el punto. Para Albanese, no se trata de política, sino de ontología. A Israel no se le critica por lo que hace, sino por lo que es. El objetivo no es frenar los excesos ni fomentar la paz, sino escandalizar moralmente la existencia misma de Israel hasta el punto de que el único remedio aceptable sea el desmantelamiento. Por eso el término «genocidio» se repite 57 veces. Ni una sola vez aparece la palabra «Hamás».

Esto no es un descuido. Es teatro.

Para que quede claro: nada de esto pretende negar el sufrimiento palestino. Las condiciones en Gaza son terribles, el peso de la ocupación es real, y las acciones israelíes, especialmente en tiempos de guerra, no están exentas de errores ni excesos. Una nación madura acepta las críticas, especialmente de sus amigos. Pero la crítica que borra los matices no es crítica: es propaganda.

Tomemos la difamación del «apartheid». Como ya ha demostrado esta refutación, Israel es un país donde los ciudadanos árabes votan, ocupan escaños en el parlamento, ejercen como jueces, dirigen hospitales y universidades, y conviven libremente con sus compatriotas judíos. Si eso constituye apartheid, la palabra ha perdido todo su significado, y con ella, la gravedad histórica de la experiencia sudafricana. El propósito de tal terminología es provocar repulsión, cerrar el debate, tachar el ADN mismo de Israel de contaminado e indigno de redención.

La acusación de genocidio es aún peor. No hay ningún jurista serio, aparte de los que ya están comprometidos con la causa, que crea que las acciones de Israel cumplen con los requisitos de la definición de genocidio de la ONU.

Se podría pensar que un "régimen genocida" podría al menos lograr reducir la población de aquellos a quienes pretende aniquilar. Sin embargo, la demografía palestina ha aumentado drásticamente. Israel, a pesar de estar en guerra, sigue facilitando ayuda humanitaria a Gaza, incluso mientras es bombardeado. Es un genocidio peculiar que implica electricidad, suministros médicos y alertas por SMS antes de los ataques aéreos.

Pero el informe de Albanese no se interesa por las contradicciones. No intenta resolver el conflicto; intenta hacerlo irresoluble, presentando a Israel como excepcionalmente perverso, excepcionalmente colonial, excepcionalmente racista, excepcionalmente genocida.